



RESUMEN Y PROSPECTIVA

- Tras la inauguración del AIFA se reportaron incidentes de conflictividad, en particular agresiones de transportistas establecidos en la zona a los nuevos operadores de autobús que trasladarán a los pasajeros desde la CDMX. Además del conflicto por el control del transporte terrestre, en la zona hay un alto riesgo de que aumenten los despojos de predios, de un crecimiento acelerado del mercado ilegal de combustible, así como extorsiones a las empresas responsables de la construcción de las vialidades pendientes y de la ampliación del Tren Suburbano.
- El domingo 27 de marzo, Los Correa —organización criminal aliada a La Nueva Empresa— asesinó a 20 personas, entre estos integrantes del CJNG, en un festejo privado que tenía lugar en un palenque de Zinapécuaro, Michoacán. Si bien se percibe una mejor coordinación con el gobierno federal, ésta aún no se traduce en una disminución de la violencia en la entidad. Esto puede deberse, entre otros factores, a conflictos internos en el CJNG que han sido aprovechados por organizaciones rivales para disputar diversos espacios a lo largo del estado. Previsiblemente un incremento del despliegue militar y policial, coordinado con otras acciones de inteligencia y de gestoría social, contribuya a contener la violencia a lo largo del año, pero difícilmente ocurrirá en lo inmediato.
- A tres años de la creación de la Guardia Nacional se registra un aumento del 160% del total de sus elementos en 2021. A principios de este 2022 se ha dado a conocer un despliegue en las entidades de 104 mil 946 elementos. Un breve análisis estadístico realizado por Lantia Intelligence muestra que el nivel de riesgo por crimen organizado **no** es un factor que explique el número de elementos de la GN desplegados en cada entidad. Por otro lado, el análisis también revela que entre mayor sea el número de elementos desplegados en un estado, mayor es la probabilidad de que se registre una reducción de delitos de alto impacto en la entidad.
- La FGR abrió investigaciones en contra de miembros del pueblo yaqui del sur de Sonora por un ataque que éstos efectuaron en contra de un conductor de un camión de mudanza cuando éste último intentaba grabarlos en video exigiendo cuotas en uno de sus rehenes. Esta investigación se da en el contexto de la exigencia de la AMOTAC al Gobierno federal de resolver sus peticiones en el plazo de un mes bajo la amenaza de ordenar nuevos bloqueos.
- En las últimas semanas se han registrado múltiples operativos de autoridades federales en la región Frontera de Tamaulipas con miras a disuadir de la violencia y, potencial-

mente, avanzar en el desmantelamiento de los grupos criminales. Aunque la estrategia ha dado resultados positivos, la situación podría cambiar rápidamente en caso de que actores criminales decidan aprovechar la coyuntura para ganar espacios.

ANÁLISIS



Agreden unidades de empresas que trasladan pasajeros al AIFA, y se identifican otros riesgos graves en el corto plazo

RIESGO SOCIAL

A los pocos días de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya se reportaron incidentes de conflictividad, principalmente vinculados con la prestación del servicio de transporte terrestre, e incluso rumores sobre la operación del crimen organizado en la nueva terminal aérea.

Hasta ahora, los incidentes más graves han sido las agresiones violentas por parte de transportistas (quienes ya operaban en la zona) y se oponen al ingreso de las nuevas empresas que trasladarán pasajeros desde la CDMX. La semana pasada se reportaron más de una docena de unidades de ADO y otras empresas, apedreadas por transportistas inconformes.

Cabe señalar que, durante la construcción del AIFA, la violencia criminal se mantuvo en niveles moderados, tanto en Zumpango (el municipio donde se ubica la terminal), como en Tecámac, de donde se desplazaba una parte de importante de los trabajadores.

En virtud de la estrecha vigilancia de SEDENA, consideramos poco probable que las organizaciones criminales de mayor peligrosidad, como el CJNG, interfieran con las operaciones cotidianas del aeropuerto. Sin embargo, sí advertimos un alto riesgo de que intensifiquen su presencia en la zona organizaciones sindicales y sociales con vínculos criminales (que, por su perfil, suelen evadir la intervención de las autoridades federales).

Además del conflicto por el control de las rutas de transporte terrestre, se podrían reportar despojos de predios y un crecimineto acelerado del mercado ilegal de combustible, así como extorsiones a las empresas responsables de la construcción de las vialidades pendientes y de la ampliación del Tren Suburbano.



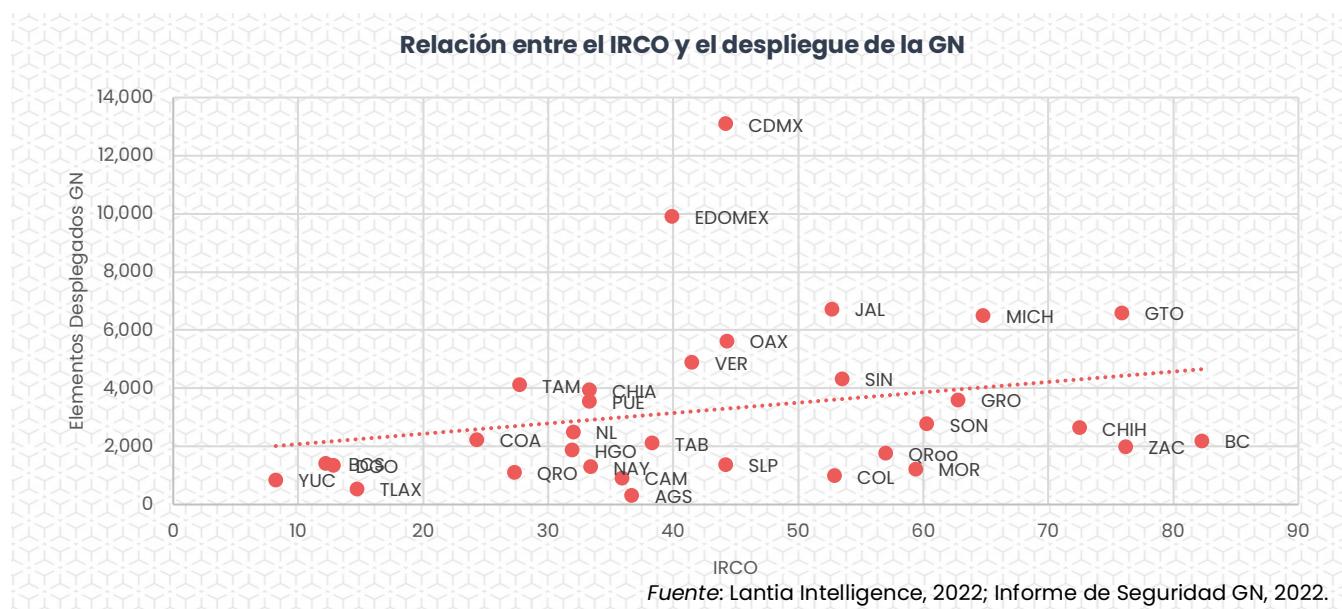
El despliegue de la Guardia Nacional y los riesgos asociados con el crimen organizado

ANÁLISIS LANTIA INTELLIGENCE

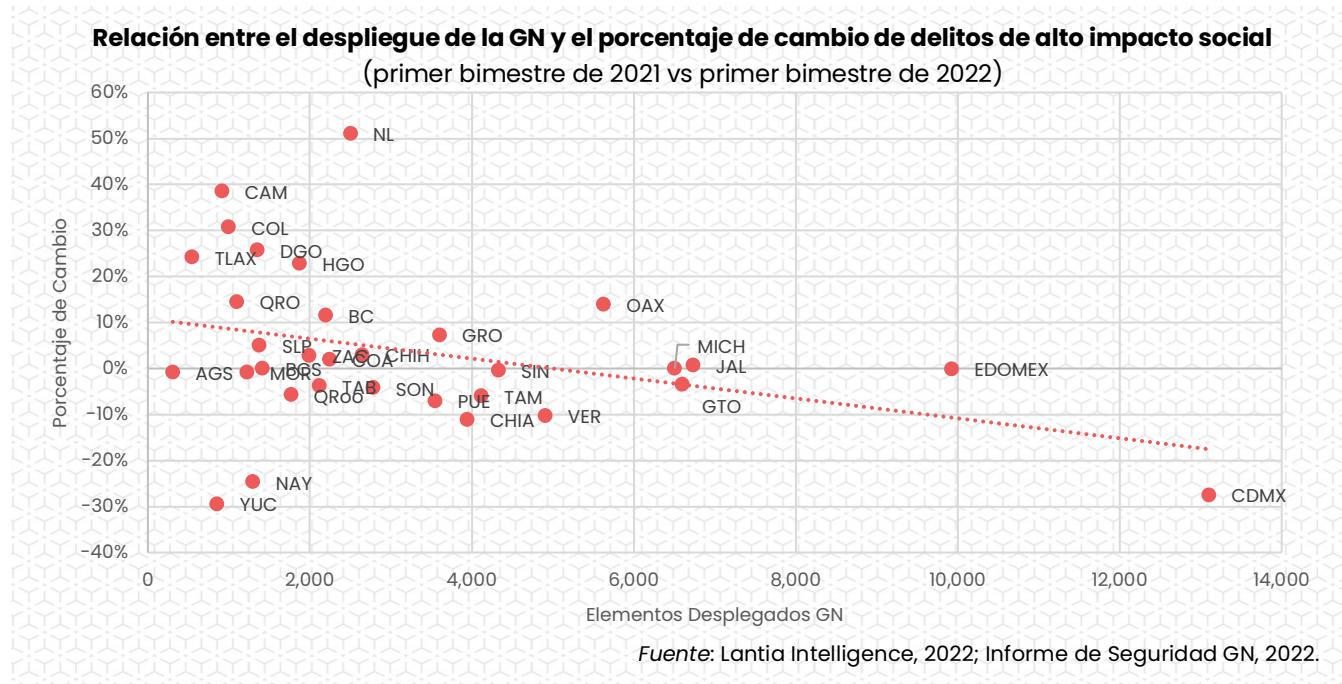
El 26 de marzo cumplió tres años de edad la Guardia Nacional (GN), la cual inició operaciones con poco más de 38 mil elementos. En noviembre de 2021 ya contaba con una fuerza operativa de 99 mil 946 elementos, lo que implica un crecimiento del 160%. En enero de 2022 se informó que un total de 104 mil 496 elementos de la GN se encontraban desplegados en los estados de la república, mientras que en noviembre de 2021 se encontraban desplegados 89 mil 951 elementos (el resto se encontraban realizando actividades de apoyo

a las operaciones), es decir, en dos meses el despliegue de elementos aumentó un 16%. Un análisis estadístico realizado por Lantia Intelligence muestra lo siguiente:

- Hay una relación positiva entre el nivel del Índice de Riesgo por Crimen Organizado (IRCO) elaborado por Lantia Intelligence a nivel estatal y el número de elementos desplegados de la GN. Es decir, entre más alto sea el IRCO en un estado, mayor será también el número elementos de la GN desplegados en la entidad. No obstante, esta relación no es estadísticamente significativa, es decir, el resultado no es generalizable. Lo anterior podría deberse a que el 22% del total de elementos de la GN se encuentran desplegados en la CDMX (12.5%) y el Estado de México (9.5%), aún cuando dichas entidades no presentan altos niveles de IRCO (lugares 14 y 17, respectivamente).
- Por otra parte, hay una relación negativa y estadísticamente significativa entre el número de elementos de la GN desplegados en los estados y el porcentaje de cambio del total de delitos de alto impacto social (homicidio doloso, robo de vehículo, extorsión y secues-



tro) registrados en el primer bimestre de 2022 respecto al primer bimestre de 2021. Es decir, entre más elementos desplegados se encuentren en el estado, se observará una mayor disminución en el total de delitos de alto impacto social o, por lo menos, un aumento moderado o mínimo. Tal es el caso de la CDMX, la entidad con el mayor número de elementos de la GN desplegados y que ha presentado una disminución del 27% del total de delitos de alto impacto social. Otros ejemplos son los casos del Estado de México, segunda entidad con más elementos de la GN desplegados y que presenta una ligera disminución del 0.03%.



Disputa entre La Nueva Empresa y el CJNG detrás de la masacre de veinte personas en Zinapécuaro

RIESGO DE SEGURIDAD

El domingo 27 de marzo un grupo de sicarios de la organización criminal de Los Correa asesinó a 20 personas que se encontraban en un festejo privado dentro de un palenque ubicado en el rancho El Paraíso de la colonia Emiliano Zapata de Zinapécuaro —17 hombres y tres mujeres fallecieron (una de ellas ciudadana de Estados Unidos).

- Los victimarios viajaban en un camioneta de distribución de Sabritas —robada el jueves 24 de marzo en la comunidad de El Salitre en Temascaltepec, Estado de México— y huieron en vehículos de las víctimas. Entre las personas asesinadas se encontraban integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —y de su brazo armado, Grupo Élite— así como el dueño del palenque y su hijo, ambos de nacionalidad estadounidense.
- Aparentemente el objetivo de la agresión era William Edwin Rivera Padilla “El Will” o “El Barbas”, uno de los líderes del CJNG en el municipio —sujeto que solía pertenecer a Los Caballeros Templarios. En la lista de fallecidos dada a conocer por autoridades no se identifica a Rivera Padilla como una de las víctimas.

En ese sentido, en un mensaje de video, el Grupo Élite del CJNG atribuyó la agresión a Los Correa y en particular a Medardo Hernández Vera “Lalo Mantecas” o “El 100”, líder de La Nueva Empresa, escisión de La Familia Michoacana, en Michoacán.

- Hernández Vera es uno de los tres principales líderes de La Nueva Empresa: los otros son los hermanos Johnny “El Pez” o “El Mojarro” y José Alfredo Hurtado Olascoaga “El Fresa”, estos últimos encargados de la organización en la región de Tierra Caliente mexiquense y guerrerense.
- Este liderazgo tripartita permite a este grupo —también denominado Cartel Brothers, Hermanos Hurtado, La Banda de El Pez, La Familia o La Nueva Familia Michoacana— operar de forma extensa en el Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos, sitios donde también se enfrentan al CJNG.

Por otra parte, Los Correa, también denominados Cártel de Los Correa o Cártel de los Cristaleros, es una organización criminal aliada a La Nueva Empresa en Michoacán y está dirigida por los hermanos Daniel “El Tigre”, Ramiro, Jaime y Dimas Correa Velázquez.

- Además de Zinapécuaro, Lantia Intelligence identifica actividades de este grupo en los municipios michoacanos de Hidalgo (El Caracol; La Palma; San Antonio Villalongín), Indaparapeo, Maravatío, Ocampo y Zitácuaro —Donaciano Ojeda (San Francisco).
- Los Correa se dedican al abigeato, extorsión (cobro de derecho de piso), tala clandestina y a la producción clandestina de metanfetaminas.

El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla —en particular la Secretaría de Seguridad Pública (encabezada por el general José Alfredo Ortega Reyes)— cuenta con una buena relación y coordinación con la federación; en ese sentido, se ha incrementado el despliegue federal de diversas corporaciones, entre estos SEDENA y Guardia Nacional, en más de 3 mil elementos entre enero y marzo de 2022.

- Sin embargo, los operativos conjuntos no han tenido aún un efecto positivo en la disminución de la violencia, tampoco para disuadir las agresiones criminales ni para disminuir la letalidad de las intervenciones de agencias de seguridad de los tres órdenes de gobierno: como lo sugieren las masacres y homicidios recientes —incluyendo los homicidios en la comunidad de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, el 27 de febrero o el asesinato de César Valencia, alcalde de Aguililla, el 10 de marzo de 2022—, pero también las intervenciones de autoridades.
- El sábado 2 de abril, por ejemplo, nueve personas fallecieron —entre estos ocho sicarios del CJNG abatidos y un policía municipal de Jiquilpan— en el contexto de una serie de enfrentamientos contra el CJNG en los municipios de Jiquilpan y Saguayo. En estas acciones participaron policías municipales, Sedena y Guardia Nacional.
 - Integrantes de autodefensas, entre ellos José Ulises Lara Gracian, denunciaron horas antes la incursión de un grupo armado del CJNG a la zona. Los sicarios atendían aparentemente un conflicto interno y se enfrentaron a la organización Pájaro Sierra (Los

Pájaros o Los Sierra), brazo armado que también forma parte del CJNG, y está dirigido por Abel Alcantar Vallejo “El Viejón” o “El Toro”.

- “El Viejón” es el presunto responsable de la masacre en San José de Gracia a finales de febrero de este año, suceso motivado por disputas internas y que, como consecuencia, también ha intensificado los conflictos internos en el CJNG.

Exacerbará conflicto y percepción de inseguridad ataque de yaquis

RIESGOS SOCIALES

El 27 de marzo, miembros del pueblo yaqui dispararon al conductor de un camión de mudanza cuando circulaba sobre la carretera federal 15 a la altura del poblado Loma de Guamúchil —una de las comunidades yaquis del sur de Sonora. Este incidente cobra especial relevancia en el marco del Paro Nacional de Transportistas agremiados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) de la semana previa, toda vez que la atención a la inseguridad en esta carretera y a la presencia de retenes yaquis fue una de las múltiples peticiones que éstos le transmitieron a las autoridades federales.

- El ataque se suscitó tras apreciar los indígenas yaquis que el conductor los estaba grabando en video con su celular —él sí efectuó un pago de 100 pesos que le exigieron para transitar sobre la carretera. Posiblemente, el conductor haya deseado publicar el video en línea para dar constancia de la existencia de retenes y de las pérdidas que estos pagos le generan al gremio. Sin embargo, esto los molestó y cuando el conductor se negó a entregar su celular con el video, ellos le dispararon.
- Si bien la AMOTAC presentó múltiples y diversas peticiones al Gobierno federal, sus representantes hicieron énfasis en la situación de inseguridad de Sonora: no sólo se trata del riesgo de ataques criminales, sino también del cobro de cuotas por parte de miembros de la comunidad yaqui, de entre 100 y 200 pesos. Además, éstos señalaron tener registro de múltiples amenazas con armas, golpes a sus conductores y daños en sus unidades (los “cristalazos”, principalmente).

La FGR abrió una investigación por el ataque y detuvo a uno de los responsables. Sin embargo, ésta es una investigación individual y probablemente no repercuta en la instalación de los retenes en el futuro próximo.

- Al sur de Sonora se identifican al menos cuatro retenes permanentes en poblados yaquis: en Loma de Guamúchil (Cajeme), Loma de Bácum (Bácum), en Estación Oroz por pobladores de Pótam y Vícum (Guaymas). En cada uno de éstos, miembros del pueblo Yaqui solicitan cuotas a transportistas y vehículos particulares para cruzar.
- Es probable que las armas que utilizan pertenezcan a la Guardia Tradicional Yaqui —un cuerpo de policía de carácter tradicional con presencia en los pueblos yaquis, al cual autoridades formales han entregado armamento. Asimismo, se tiene registro de que, en

el pasado, policías municipales han detenido a personas que se niegan a pagar la cuota, lo que evidencia apoyo institucional del Ayuntamiento de Cajeme.

La AMOTAC estableció un plazo de un mes para que autoridades federales resuelvan acerca de sus peticiones o, de lo contrario, efectuarían más bloqueos en el país. Aunque esta investigación penal podría encuadrar dentro de las peticiones, es probable que no coadyuve a tranquilizar a los transportistas y, por el contrario, fortalezca su posición frente al Gobierno federal —en el entendido de que el ataque nunca se hubiera dado de haber intervenido las autoridades para retirar los retenes.

A pesar de los riesgos, autoridades buscan consolidar desmantelamiento de grupos criminales en Tamaulipas

POLÍTICA DE SEGURIDAD

En las últimas semanas se han registrado múltiples operativos de autoridades federales y estatales en Tamaulipas (despliegues para atender reportes de tránsito de caravanas de sicarios y capturas de miembros de alto perfil, entre otros) con los que, aparentemente, se buscan consolidar acciones de desmantelamiento en el contexto de la captura de sus líderes. Dichos operativos resultan relevantes por tres razones:

- La capacidad operativa, presencia territorial y potencial de violencia es alta (el Cártel del Noreste, por ejemplo, es el tercer grupo criminal con mayor presencia territorial en el país). De no realizar acciones de prevención situacional (despliegue de elementos), se esperaría que éstos implementaran una estrategia de ataques en contra de autoridades —como represalia a su captura— pero también en contra de otros de sus miembros en la medida en que los liderazgos compiten por hacerse del control de las bandas.
- Una aparente debilidad también incentiva a sus rivales a emprender ataques con los que esperarían ganar territorios en disputa (los municipios de mayor riesgo por este motivo son Camargo, Miguel Alemán, Río Bravo, Valle Hermoso).
- Incidentes de violencia en los próximos meses contribuirían a dañar la percepción de seguridad en el estado y sobre el desempeño de las autoridades, y podría afectar las probabilidades de triunfo de los actuales candidatos a la gubernatura del estado en las próximas elecciones de junio de 2022.

En este sentido, una de las capturas más importantes de los últimos meses fue la de Juan Gerardo Treviño Chávez “El Huevo”, líder del Cártel del Noreste (CDN) el 13 de marzo e inmediatamente deportado a Estados Unidos. Desde entonces, autoridades federales también detuvieron a José David Moreno, aparente jefe de plaza del CDN en Monterrey el 24 de marzo —quien también fue deportado a EE. UU. el día siguiente de su captura.

- Información disponible sugiere que Juan Cisneros Treviño “El Juanito” habría asumido el liderazgo del Cártel del Noreste. No obstante, existen indicios que sugieren que él mantenía una fuerte rivalidad con “El Huevo” e, inclusive, entre sus miembros han

circulado sospechas de que él entregó información a autoridades para su captura y en contra de miembros de La Tropa del Infierno —brazo armado del CDN.

- Aún si estas sospechas no son ciertas, estas acusaciones podrían detonar rompimientos al interior del Cártel del Noreste y un repunte en la violencia en todo el territorio en el que este grupo tiene presencia. Especialmente riesgoso sería la insubordinación de miembros de La Tropa del Infierno, toda vez que éstos se han caracterizado por lanzar ataques de gran contundencia contra sus enemigos, y producir también violencia indiscriminada.
- En este contexto, se estima probable que se susciten un mayor número de enfrentamientos entre fuerzas federales y miembros del CDN (en el último registrado, el 28 de marzo, fueron abatidos nueve miembros de La Tropa del Infierno).

Por último, en el contexto del despliegue de fuerzas federales en la región controlada por el CDN, el 31 de marzo se registró un enfrentamiento con miembros de la facción de Los Metros liderada por César Morfín Morfín “El Primito” en el que fue abatido “El Tilín”, presunto jefe de sicarios. En este sentido, es probable que éstos intenten aprovechar la coyuntura para hacerse del control de municipios por cuyo control ambos grupos han mantenido una larga e intensa contienda.